

COLOMBIA: UNA ESTRATEGIA LIBERAL PARA UNA MODERNIZACIÓN SIN MODERNIDAD*

Consuelo Corredor
Universidad Nacional de Colombia

Si nos acogemos a las características dadas por M. Berman a cada una de las tres fases que identifica en la historia de la modernidad, podría parecer sorprendente que la tesis que aquí se propone para interpretar la crisis colombiana actual, se afiance en la idea de que Colombia se encuentra en la tensión de vivir «entre dos mundos», proceso que experimentaron las sociedades occidentales en el siglo XIX. Sin embargo, ello deja de sorprender si se acepta por el momento y como hipótesis de trabajo, que la sociedad colombiana ha experimentado estas tres fases en un tiempo record: el presente siglo.

En efecto, bien podría afirmarse que hasta mediados de siglo se han dado transformaciones que anuncian cambios sin tener conciencia de ellos. A partir de entonces y hasta hoy, prevalece la sensación de estar viviendo «simultáneamente en dos mundos», que antes estaban separados, padeciendo las consecuencias de haber perdido el contacto con nuestras propias raíces.

Se trata pues, al decir de García C., de una «intersección de diferentes temporalidades históricas». Así, procesos que las sociedades occidentales comenzaron a experimentar hace cuatro siglos, en Colombia se han condensado y amalgamado en un breve tiempo. Ello, sin duda, no puede estar exento de profundos traumas puesto que se trastoca todo el orden social sin dar tregua para construir y consolidar experiencias y percepciones.

G. Molina sostiene que «lo que mantiene la cohesión de una sociedad es la certeza de que el mañana será mejor que el presente». Sin embargo, en Colombia, el apremio constante del presente ha postergado la reflexión sobre el mañana. Los problemas del hoy, pueden no ser los más importantes pero sí los más urgentes. De tal forma, la erosión del orden social tradicional, las profundas muta-

* Capítulo II de su tesis *Los límites de la modernización*, Bogotá, 1992, UNC y Cinep.

ciones socioculturales y el deterioro de la cohesión social y de la identidad nacional, han estado ocultas y por tanto su resolución ha sido postergada en forma permanente. Esta es la matriz del conflicto en que se debate en la actualidad la sociedad colombiana.

Estas son las razones fundamentales que sustentan el esfuerzo por examinar el conflicto social y político por el que atraviesa la sociedad colombiana, a la luz de este debate sobre modernidad y modernización, que se revela como pertinente para abrir caminos de interpretación sobre el presente, y, por qué no decirlo, expectativas de futuro.

La sensación de vivir simultáneamente en dos mundos configura un marco que conjuga «una extraña mezcla de realidad y de fantasía: por una parte actúa como marco para las fantasías de las personas sobre lo que quisieran ser; por otra parte ofrece un conocimiento preciso - para las personas que puedan descifrarlo - sobre lo que realmente son». Pero en cualquier caso, fantasía o realidad, el efecto final es devastador: la distancia entre lo que se quiere ser y lo que realmente se es se torna ofensiva, se revela como injusta y conduce al cuestionamiento de la legitimidad del orden vigente.

La sensación simultánea de estar viviendo entre dos mundos, proviene de las profundas mutaciones experimentadas por la sociedad colombiana a lo largo del proceso de modernización económica que «desde arriba» han promovido las élites económicas y políticas dominantes. Este proyecto de modernización ha sido de muy corto alcance por las restricciones derivadas del orden internacional, por la persistencia de factores estructurales que inhiben la dinámica económica, así como también, por el carácter conservadurista de las élites dominantes que le han dado un rotundo sí a la libre concurrencia económica pero que han persistido en la pretensión de mantener un orden sociopolítico tradicional, sobre el cual afirman su hegemonía y dominación.

La tensión obvia que resulta de las dificultades por hacer compatibles un proyecto de modernización, - que por definición comporta cambios en la organización social de la producción, y por consiguiente en las expectativas y valores de la población -, con la permanencia de un proyecto político fundado en una inamovilidad social, no puede menos que resultar profundamente conflictivo e inhibir, finalmente, la continuidad de los dos procesos.

La tesis general explicativa de la crisis actual por la que atraviesa la sociedad colombiana, es que en ella se expresa la tensión resultante de un orden tradicional erosionado por la modernización, sin la construcción de valores modernos. La razón central que explica el curso seguido por la sociedad colombiana, **es que el Modelo Liberal de Desarrollo seguido en Colombia, ha sido el contexto que ha permitido el avance de la modernización económica y la contención de la modernidad.**

Es ésta la hipótesis central que se quiere demostrar en esta investigación. Para su adecuado desarrollo es conveniente precisar en el presente capítulo, qué se entiende por modelo liberal de desarrollo, cuáles son las principales razones históricas que explican su configuración y, por último, cuáles son sus implicaciones más relevantes para comprender la conflictiva tensión en que se debate hoy la sociedad colombiana.

El Modelo Liberal de Desarrollo

Hasta las primeras décadas del presente siglo, Colombia es una sociedad profundamente tradicional, rural y agraria, basada en una organización estamental y jerárquica. Las estructuras económica y cultural son marcadamente heterogéneas, prevalece la desintegración física de las regiones y la fragmentación del poder político, prácticamente indiferenciado entre lo civil y lo militar.

El proceso de Independencia, la formación de la República, del Estado y de la Nación, que se operan desde el siglo XIX, son formas carentes de sentido para la mayoría de la población, cuyos referentes no van más allá de su inmediato entorno en el que las autoridades civiles-militares y la Iglesia, son las que otorgan un sentido de pertenencia, de solidaridad y de cohesión entre las comunidades.

La precaria integración nacional tanto física como social impidió en forma muy temprana un control total del territorio por parte de las élites dominantes. Numerosas zonas del país quedarán sustraídas a la normatividad formal que poco a poco se instaura desde los centros de decisión, una vez rotos los lazos directos de dependencia con la metrópoli española. Se configuró una insularidad en la cual el control y la autoridad fueron ejercidos en forma particular por caciques políticos, por los latifundistas, por algunas empresas agrícolas o mineras, en especial extranjeras, y por la figura eclesiástica, quienes trazan el umbral entre lo permitido y lo prohibido.

El modelo primario exportador que prevaleció hasta los años treinta del presente siglo, fue la fase durante la cual la economía se integró a la dinámica capitalista mundial, asignándosele un rol en la división internacional del trabajo, como exportador de materias primas. En la configuración de la economía exportadora el papel del Estado fue casi imperceptible. «Desde el siglo pasado las economías regionales demostraron la posibilidad de vincularse con el mercado mundial sin la mediación de un poder central efectivo».

Así, los sectores agroexportadores, en los cuales se crearon las fuentes de acumulación de capital, no se organizaron a través del Estado. Su paulatino tránsito hacia una burguesía capitalista tampoco fue mediado por éste. Poulantzas señala que una de las funciones del Estado es ser organizador político de la clase capitalista y mediador entre ésta y la clase obrera. En Colombia, históricamente el papel del Estado en estas tareas ha sido particularmente débil.

En forma muy temprana el marco de intervención del Estado y sus modalidades fueron trazadas por las élites dominantes, colocando la intervención a su servicio en una relación sin contraprestación: las élites subordinan y usufructúan el Estado, pero no le tributan lo suficiente y desconfían de su capacidad de gestión y de regulación.

Se trazó así un tipo de intervención que no limita los intereses particulares en aras del interés general. Ello impidió que el Estado ganara una relativa autonomía para poder cumplir las funciones que le son propias y constituirse en el garante de los derechos colectivos. Ha sido un proceso continuo de **privatización del Estado**, en el sentido de subordinar las instituciones y la acción estatal a intereses particulares, respetando siempre el inflexible marco socioeconómico y político. De

tal forma se fue configurando un **modelo liberal de desarrollo**, que no se opone al intervencionismo estatal, pero que sí le traza su orientación y sus límites.

Las élites dominantes coparon los espacios políticos y económicos en nombre del principio liberal del respeto a la iniciativa privada, extremándolo al punto de oponerse a cualquier regulación y control estatal. El sistema político fue tempranamente monopolizado por los partidos Liberal y Conservador, desde su formación a mediados del siglo XIX, con lo que redujeron el ámbito de lo público a sus dos subculturas, cumpliendo en forma limitada pero con relativa eficacia las funciones de articulación social, proporcionando un sentido de pertenencia e identidad, con una difusa idea de nación. Para ello contaron con el sectarismo como el principal mecanismo de adscripción política y con el clientelismo como medio de articulación.

Por su parte, las élites económicas organizadas en torno a los sectores agroexportadores imponían la política económica de su conveniencia en un marco económico carente de controles, exigiendo del Estado una política de inversiones públicas restringida a la creación de obras de infraestructura, encaminadas a facilitar la expansión y consolidación de su actividad.

Lo anterior significó una estrategia de integración y articulación para las élites políticas y económicas, pasando por encima del Estado, y reservándose para sí la función de mediación entre éste y las dispersas y fragmentadas comunidades regionales y locales.

El escenario hacia los años treinta, es descrito así por J.O.Melo:

«Las élites regionales aparecían ya crecientemente unificadas en el plano nacional, dirigidas por una burguesía que giraba alrededor del café, de los procesos de comercio exterior y del naciente sector industrial, y que lograba imponer sus políticas, orientadas por un anti-intervencionismo bastante radical, en un Estado débil que había tenido una participación muy limitada en los procesos culturales, sociales y económicos que habían producido ya, para 1930, las bases difícilmente cuestionables de una sociedad capitalista».

A partir de los años cuarenta y más exactamente de la coyuntura derivada de la segunda guerra mundial, la modernización económica se abre paso en Colombia. El desarrollo de la agricultura comercial, la dinámica en la acumulación industrial y la diversificación de esta última, demandaron del Estado una mayor actividad y una ampliación de su quehacer, pero siempre dentro de los límites impuestos por el liberalismo económico y el conservadurismo político de las élites dominantes.

De tal forma, las características generales de la organización social y política se mantendrán, aparentemente sin mayores traumatismos, durante el período de modernización económica. De ahí que muchos analistas compartan la idea del carácter profundamente liberal con el que se adelantó el proceso de industrialización en Colombia, y que fue el sustento de la estrategia de modernización.

Con base en lo anterior nos podemos acercar a una precisión de lo que se quiere designar como **Modelo Liberal de Desarrollo**. Dos advertencias previas, de tipo general, son de suma importancia:

i) En primer lugar, el reconocimiento explícito de que el curso del desarrollo seguido por un país, depende no sólo de su dotación de recursos sino, y principal-

mente, de la correlación de fuerzas sociales, económicas y políticas que a través de diversas alianzas o rupturas le imprimen un contenido al desarrollo.

ii) En segundo lugar, el convencimiento de que ningún proceso de desarrollo puede ser ajeno a la intervención estatal. En sentido estricto este término es ambiguo, pues sugiere una dicotomía entre los ámbitos económico y político, siendo este último el atribuido al Estado. Así, aparecería el Estado como una instancia jurídica abstracta sin nexos directos con la producción y reproducción de la vida material. Según esta visión, el gasto público y la política económica aparecen como los «medios» a través de los cuales el Estado, como algo externo, actúa sobre lo económico.

En oposición a esta idea, la visión que aquí se adopta es que el Estado es consustancial a toda organización social y por consiguiente el modelo liberal de desarrollo no se opone al intervencionismo estatal. Otra cosa es que le imprima un contenido, una orientación, y por tanto, le confiere una modalidad particular a la relación Estado, economía y sociedad.

Podría entonces decirse que el **modelo liberal de desarrollo** alude a un proceso de desarrollo en el que prevalecen los intereses e iniciativas privadas en desmedro del interés colectivo. Ello significa hacer del mercado el núcleo de la organización económica y social, y del Estado una instancia que refrenda la consecución de los intereses particulares a través de la protección del orden en el cual tiene lugar dicha consecución. El sistema político se confina a una conservación del poder sin proponer, y aún menos admitir, la posibilidad de un orden alternativo. En éste modelo, el contenido y la orientación del Estado son definidos en función de los intereses privados de las élites dominantes que son quienes detentan la situación de privilegio en esta lucha desigual por la consecución de los intereses particulares. De tal forma, el modelo liberal de desarrollo arrastra consigo la exclusión política, social y económica de amplios sectores de la población. Es un modelo que integra los intereses de las élites dominantes y desintegra y atomiza los intereses de las mayorías.

Este curso liberal del desarrollo ha sido avalado por el modernismo como ideología, como apología de la modernización, y ha hecho del desarrollismo la mejor política para la consecución de sus fines. Su enorme costo ha sido su carácter profundamente excluyente configurando amplias «masas de extras» que serán involucradas como constructoras directas de las transformaciones económicas, que paulatinamente se van abriendo paso, pero excluidas de los beneficios de las mismas. El sistema de dominación vigente no sólo apoya este orden sino que le confiere legitimidad al mismo a través del mantenimiento de los valores y la cultura política propias de un orden tradicional.

Las transformaciones económicas de corte capitalista que se van perfilando en Colombia desde inicios de este siglo, responden en lo fundamental a la modernización que como rutina ya lideraba la articulación entre estas economías y las metrópolis. Fueron transformaciones derivadas más de las coyunturas externas, que debidas a estrategias deliberadas de las élites económicas y políticas. De ahí que sea importante insistir en que el conservadurismo es uno de los rasgos que caracterizan a las élites dominantes en Colombia. Ello se expresa de manera pa-

tente en su miedo a las transformaciones, al cambio y a las mutaciones en el orden social, miedo que no es más que la otra cara de su debilidad, y por consiguiente cualquier cambio en el orden social lo perciben como una seria amenaza para la continuidad de su poder y dominación.

Las élites dominantes al ser avasalladas por la dinámica de la modernización, a través de la expansión del capitalismo a escala mundial, se adhieren a ella por simple supervivencia pero protegiéndose al máximo del principio de la libre competencia, fundamento del desarrollo del capital. Este será uno de los principios más invocados pero a la vez uno de los más temidos: en lo económico, el temprano monopolio sobre los recursos de capital les permitió protegerse de la competencia restringiendo la entrada de nuevos competidores, recurriendo a políticas proteccionistas según la coyuntura, que desde el Estado se venden como políticas de interés nacional. En lo político la protección se extrema y la libre competencia sólo opera para quienes sean invitados a concurrir, aceptación que exige contraprestaciones y cánones de comportamiento que no alteren el orden jerárquico tradicional.

Tenemos así unas formas aparentemente modernas, el mercado, el Estado y los partidos políticos, tras las cuales se ocultan unas condiciones económicas, sociales y políticas propias del mundo tradicional: relaciones de clientela, de parentesco, de lealtades personales, que están en la base de la organización social que las formas modernas dicen representar.

Las razones históricas de su configuración

En Colombia, al igual que en los demás países de América Latina la constitución de la República significó el advenimiento de instituciones formalmente modernas sobre un escenario profundamente tradicional. Desde mediados del siglo pasado se hacen expresas dos visiones sobre el orden social: una, en cabeza de sectores minoritarios de liberales radicales, en cuyo ideario figura una despolitización de la Iglesia y una desacralización del orden y de la política que lo rigen, y otra, expresada en las mayorías conservadoras que encuentran en el orden tradicional, y más exactamente en las virtudes religiosas de la obediencia y la resignación, la garantía para la conservación de sus privilegios mediante su dominación sobre una sociedad organizada en forma estamental y jerárquica, atravesada por profundas desigualdades sociales.

El triunfo de los sectores conservadores se institucionalizó en la Constitución de 1886, en la presidencia de Rafael Nuñez, que le otorgó a la religión católica y a la Iglesia el fundamento de la unidad nacional. De esta forma, los conflictos entre la Iglesia y el Estado, que ocuparon lugar central en el debate entre liberales radicales y conservadores a mediados del siglo pasado, no condujeron a la laicización del Estado y de la sociedad sino a una «versión republicana del régimen de cristiandad». La Regeneración de 1886, proyecto que sintetiza la victoria del conservadurismo, se basó en la Iglesia como elemento de cohesión nacional y en lo divino como explicación del orden «echando atrás todas las medidas anticlericales y contrarias a la moral católica».

Se puso así fin al primer intento de secularización en el país, que en opinión de los sectores más retardatarios significaba una degradación y degeneración del orden social, y por ello tomaron en sus manos la tarea de **regenerar** a la nación. El triunfo del conservadurismo significó una temprana contención de la modernidad, apoyada en lo fundamental en la educación y en la Iglesia.

La importancia de la religión en un orden tradicional no se puede subestimar. Así lo precisa en forma contundente H. Lefebvre: «En una sociedad de desarrollo económico y técnico débil, la ideología se tiñe, inevitablemente de religiosidad y, además, no es más que una ideología, en el sentido corriente de la palabra». Las religiones «proceden por mandamientos, a los que se añaden méritos morales, recompensas en un futuro lejano. Utilizan para los imperativos y las motivaciones una lengua sagrada, reservada a los iniciados, que éstos traducen a los fieles» .

La Iglesia se convierte así, en el mejor guardian de un orden tradicional leído a la luz del orden divino. Ello explica que a lo largo del siglo actual, los sectores conservaduristas con la Iglesia a la cabeza se hayan opuesto en forma reiterada a todo intento de secularización. Muestra de ello fue el fracaso del intento del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938) por reformar la Constitución, en cuyos propósitos destacan la separación entre la Iglesia y el Estado, el matrimonio civil, el divorcio vincular, la soberanía popular como fundamento de la sociedad, la libertad de religión y culto y la enseñanza laica y obligatoria. Oposición que no será la única pero sí quizá la más virulenta.

El importante papel jugado por la Iglesia ha contado con el beneplácito de la mayoría de las élites económicas y políticas, pues ella coadyuva en la tarea de legitimar su dominación en el orden vigente. Sin ella, no podría comprenderse el orden social que hizo posible la configuración del modelo liberal de desarrollo en Colombia.

Dos factores están en la base de la configuración de éste modelo: uno, la omnipresencia del bipartidismo en el sistema político colombiano, y dos, la temprana alianza de intereses entre agroexportadores e industriales.

La omnipresencia del bipartidismo en el sistema político colombiano

Los tropiezos para una integración nacional derivan no sólo de las características físicas del territorio colombiano, que en la práctica y durante largo tiempo actuaron como verdaderas barreras a la integración y comunicación de las diversas localidades. También, y principalmente, derivan del mismo proceso histórico de ocupación del territorio y de las formas de organización económica y política.

El país de entonces, era un conjunto de regiones profundamente heterogéneas y desarticuladas entre sí. La caricatura de «integración nacional» se operó a través de la figura de un Estado centralista, cuyos nexos con la sociedad civil estuvieron mediados en forma muy temprana y exclusiva por los partidos Liberal y Conservador. A ello se refiere D. Pècaut al señalar como «la imagen de la unidad nacional ha sido siempre muy frágil, puesto que la sociedad ha estado de entrada, sometida a la oposición de dos subculturas partidistas en muchos aspectos pre-políticas».

El bipartidismo, a través de su dominación local y regional, apoyada principalmente en el sectarismo y en el clientelismo como formas de adscripción y de arti-

culación política, se constituyó en el único mediador entre el Estado y la sociedad civil, con una forma de organización partidaria aparentemente moderna, pero en su base profundamente tradicional: relaciones primarias de solidaridad, compadrazgo, lealtades personales, hereditarias, etc.

La débil organización estatal dejó desde entonces numerosos espacios vacíos llenados por lazos primarios de solidaridad y por relaciones de fuerza, que como práctica política fue propiciada por los partidos Liberal y Conservador, los que hicieron del pueblo un objeto de enfrentamiento para lograr su control político y territorial. Fueron numerosas las guerras civiles que a lo largo del siglo XIX enfrentaron a «rojos» (liberales) y «azules» (conservadores) atizados por el sectarismo bipartidista.

Así, desde sus inicios, los partidos políticos tradicionales se conformaron a partir de numerosos micropoderes locales y regionales profundamente fragmentados y se convirtieron en los únicos canales de intermediación entre estas comunidades y las instancias nacionales, y en los únicos mecanismos de identidad para la mayor parte de la población, llenando el vacío dejado por el «vínculo unificador de la corona española». El monopolio bipartidista del espacio político ejercido por caciques y gamonales locales y regionales, está en la base de la privatización de lo público, pues desde entonces su poder condiciona la presencia estatal en las zonas que controlan. Ello hizo de la «institucionalización del favor» una práctica usual en Colombia para acceder a los servicios estatales a través de la intermediación de los jefes políticos, usufructuando el erario público para sus fines partidistas. Hasta un pasado reciente en muchas comunidades no existía la conciencia de la obligación estatal de prestar los servicios públicos y por tanto sus demandas se limitaban a ser expuestas ante los barones políticos, quienes ofrecían sus «favores» a cambio de la lealtad electoral.

Tenemos entonces que durante todo el siglo XIX, e incluso en los primeros años del presente, la fuerza tripartita de la hacienda, la Iglesia y los partidos, fue el eje articulador de la vida social, cultural y política de la sociedad colombiana. Un escenario en el que «El Estado Colombiano aparecía en efecto, como un Estado crónicamente suplantado y por lo tanto como un poder con casi inexistentes solidaridades nacionales».

De esta forma, la omnipresencia del bipartidismo en la vida política colombiana, y el clientelismo y el sectarismo como mecanismos de adscripción e identificación partidaria, significaron una práctica autoritaria y vertical, ajena a la formación de una cultura democrática. A esta grave consecuencia se refiere F. González en los siguientes términos:

«La misma forma de estructuración interna de los partidos implica un carácter nada democrático: los partidos se fueron construyendo como federaciones nacionales de oligarquías regionales y locales (en el sentido técnico y etimológico de la palabra) para articular desde arriba las burocracias del centro de la nación con el resto de la sociedad nacional, caracterizada por la fragmentación y la desintegración. Este estilo de construcción de los partidos excluye de entrada la participación política autónoma de las grandes masas del país».

De otra parte, la fragmentación y privatización del poder político cuyo espacio de acción, por excelencia, es lo local y regional, se constituye en una seria barrera para la conformación de un Estado-Nación, pues el Estado se encuentra atrapado

por los intereses bipartidistas sin lograr una autonomía relativa necesaria para colocarse por encima de los variados intereses locales y regionales, y poder así coadyuvar a la formación de una idea de Nación, forma organizativa de la sociedad moderna. Pero no son éstos los únicos intereses en los cuales se encuentra atrapado el Estado. Las élites económicas, imbuidas del liberalismo económico a su modo, le impondrán también límites a la acción estatal profundizando la desintegración social.

La temprana alianza entre los intereses agroexportadores e industriales

Alrededor de los años treinta, la sociedad agraria tradicional será escenario de importantes mutaciones, estimuladas por la favorable coyuntura de la crisis mundial del capitalismo, que le permitió a los emergentes sectores industriales abrirse paso en la actividad económica doméstica ante las dificultades que en el abastecimiento interno se produjeron a raíz de la misma.

Sin embargo, la emergencia de estos sectores no significó, en modo alguno, la emergencia de nuevas formas de organización social y política. Lo que sí se estimuló fué la acción del Estado, pero para paliar los nocivos efectos de la crisis y proteger los intereses de las élites dominantes, así como para aclimatar los conflictos sociales, que desde los años veinte, iban cobrando importancia en el escenario nacional como fruto de las transformaciones que en las relaciones de trabajo se venían sucediendo.

La temprana alianza entre los sectores agroexportadores y los industriales emergentes, así como la prevalencia del sistema de dominación bipartidista, le imprimió un carácter restringido al proceso de modernización económica y le impuso sus propios límites. De tal forma el «proyecto burgués de industrialización» no entró en contradicción con los intereses de la economía exportadora; por el contrario, fue un «proyecto complementario», en el que «sólo se permitieron e impulsaron unas formas determinadas de intervención del Estado».

El camino de la modernización económica basado en una estrategia de industrialización, se abrió paso en forma acelerada a partir de los años cuarenta, favorecido por la coyuntura de la segunda posguerra. Pero el ascenso de la burguesía industrial no significó un cambio en el modelo liberal de desarrollo seguido hasta el momento, ni mucho menos una ruptura con el régimen político vigente.

La lucha de intereses máximo se expresó en una recomposición de fuerzas en favor de los agroexportadores o industriales según se lograra inclinar la balanza en materia de política económica. El usufructo del Estado a través del diseño y ejecución de la política económica ha sido el campo de batalla según que las coyunturas les resulten favorables a unos u otros. Sus contradicciones no van más allá, y de ahí que no hayan tenido que acudir a fuerzas ubicadas en el «exterior de lo social», es decir, a los sectores privados del poder para poder implementar su proyecto de modernización.

Lo anterior contribuye a explicar por qué en Colombia no prosperó, y en último extremo no fue necesario, el populismo como régimen político para facilitar el ascenso de la burguesía industrial y trazar un proyecto de modernización de largo

alcance. Esta importante diferencia de Colombia con relación a algunos otros de los países de la región es señalada por G.Misas:

«A diferencia de Argentina, Brasil o México donde el populismo constituyó el régimen político que permitió a la burguesía industrial penetrar el aparato de Estado y promover la industrialización, en Colombia, la característica dominante, desde la época de la crisis, ha sido la gran unidad de las clases dominantes dentro de un modelo de industrialización profundamente integrador, lo cual ha permitido que las contradicciones que genera el proceso de industrialización al interior de las clases que conforman el bloque en el poder, pudieran ser resueltas a su interior sin recurrir a alianzas con clases por fuera de dicho bloque».

De ahí que los pocos intentos políticos por movilizar fuerzas distintas a las del bloque en el poder, es decir fuerzas ubicadas en el exterior de lo social, hayan sido reiteradamente obstaculizados y combatidos. Cuatro son los casos que confirman esta argumentación.

i) El intento de Alfonso López Pumarejo con su proyecto de la «Revolución en Marcha» (1934-1938), que pretendió «hacer de la clase obrera un elemento de orden» en el sentido de ejercer presión a través del binomio «Estado-obreros» sobre el poder «burgués-oligárquico».

ii) El fracaso del proyecto de J.E.Gaitán, por los años cuarenta, que ha sido considerado prácticamente como el único proyecto populista en Colombia, caracterización frente a la cual hay muchos reparos. Pero independientemente de ello, lo que sí es claro es que Gaitán pretendía acudir al pueblo, al «país nacional», para enfrentar a la oligarquía, al «país político», instaurada en el poder.

iii) En el mismo sentido se puede señalar el proyecto reformista de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), que pretende el apoyo y la canalización de las bases rurales, más exactamente de los campesinos, en busca de enfrentar las restricciones impuestas por los sectores agrarios tradicionales para el avance de la industrialización.

iv) Por último, el intento de «apertura política» del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), en un contexto de creciente pérdida de legitimidad del sistema bipartidista, el que persigue reconstituir esa legitimidad dando cabida en el escenario político a las distintas fuerzas hasta ahora excluidas. Este proyecto requería de un clima de distensión, lo que explica el protagonismo que le concedió a los grupos insurgentes alzados en armas, como actores de primer orden a ser incluidos en el espacio político nacional.

En todos estos casos se trató de acudir a fuerzas externas al bloque en el poder, en busca de apoyo para adelantar un proyecto que en ningún caso significaba una ruptura con el orden establecido, sino más bien una recomposición de fuerzas favorable a una modernización del país en una perspectiva de más largo alcance. Es la debilidad de quien encarna el proyecto la que explica la búsqueda de ese apoyo, y no la convicción en adelantar una estrategia que remueva el orden vigente y elimine la exclusión social, económica y política. Es ésto lo que nos permite afirmar que en Colombia las clases dominantes han tenido una estrategia de poder y no de un orden alternativo.

Por otra parte, a la alianza de intereses entre la burguesía industrial y los sectores agroexportadores también contribuyó la procedencia de los empresarios. M.

Palacios señala que la burguesía industrial colombiana no se abre paso a través de una lucha contra una aristocracia que base su poder en la gran propiedad y en la protección, sino que «son empresarios industriales vinculados a las capas agroexportadoras e importadoras», entre los cuales hay contradicciones menores. Por ello califica a estos empresarios como «un grupo profesional que no social, puesto que por sus orígenes y su formación ideológica los industriales eran herederos del mundo anterior a la crisis».

Esta alianza de intereses derivó en una falta de competencia económica, lo cual ha tenido por lo menos dos consecuencias de importancia: de una parte ha propiciado un carácter muy conservador en materia de política económica, pues en general ha sido persistente el acuerdo entre industriales, agroexportadores y terratenientes: demandar del Estado una política permisiva de precios, protección a la propiedad, actividades de fomento, infraestructura física y crédito subsidiado.

Por otra parte, la ausencia de competencia garantizada por el monopolio de las fuentes de capital, propició de forma muy temprana la formación de estructuras oligopólicas, profundizando el carácter excluyente de la modernización económica. A ello se refiere S. Kalmanovitz: «(en Colombia) no hay entonces una fase de competencia inicial desde comienzos de siglo hasta los años cuarenta que sirva de base a la lucha entre capitales que terminan por conformar los carteles y corporaciones del capitalismo monopolista, sino que las limitaciones a la entrada operan con fuerza desde el inicio de la industrialización y ésta arranca oligopolista».

Así pues, el modelo primario exportador fue el fundamento y a la vez el límite de la estrategia de modernización basada en la industrialización. Esta se nutrió de las fuentes de la acumulación provenientes de la actividad agroexportadora, consolidando un modelo muy liberal de industrialización en el que, al decir de F. Cardoso y E. Faletto, el Estado no logró reclamar para sí una cierta autonomía frente al capital que le permitiera desbordar el estrecho marco de la industrialización que se consolidó.

De esta forma, la suerte de la burguesía industrial quedó amarrada a los intereses agroexportadores, al ser estos últimos los que la proveían de las divisas necesarias para la adquisición de bienes de producción (maquinaria y equipo) y de materias primas importadas. Unos y otros, al unísono, en los momentos adversos demandarán del Estado una mayor intervención a través de medidas que les permitan hacer frente a la crisis. El invocar o rechazar la intervención, según la coyuntura, es expresión de su debilidad como clase, en tanto su supervivencia no está garantizada por una base firme de acumulación sino por la práctica fácil de aprovechar el auge sin restricción alguna y acudir al Estado en la depresión.

La no diferenciación entre lo público y lo privado: una derivación lógica del modelo

La consolidación del modelo liberal de desarrollo y del régimen político bipartidista como su sustento, han sido los pilares centrales sobre los cuales se ha construido el proceso de modernización económica, y a la vez, los principales obstáculos para la configuración de una sociedad moderna.

Las aceleradas transformaciones en el orden económico han tenido como guía la confianza en el mercado como asignador de recursos y de bienes, con el resultado de la exclusión de amplios sectores de la población del beneficio de las mismas. Ello ha sido posible por la estrategia desarrollista, por el sistema de dominación impuesto por el bipartidismo y por la precaria organización estatal resultante de este modelo.

La ideología liberal que se ha aplicado sin restricción en el mundo económico ha sido fuertemente restringida en el mundo político. Los principios de soberanía e igualdad de derechos y de oportunidades, han hecho parte del discurso de las élites dominantes, pero su ejercicio práctico se lo han reservado para ellas.

Una de las graves consecuencias de esta estrategia de «modernización desde arriba», ha sido impedir la diferenciación entre lo público y lo privado. Más exactamente, la exclusión política, social y económica de que han sido objeto amplios sectores de la población, como resultado de la prevalencia de los intereses particulares de las élites dominantes, ha formado una confusa idea de lo público, reducida a una mera instancia de legitimación formal del orden vigente y de rapiña real en busca de intereses particulares y partidistas.

Esta indiferenciación entre lo público y lo privado se expresa en una indiferenciación entre el Estado y el sistema político bipartidista. Como ya lo señalamos, la indiferenciación entre uno y otro proviene del mismo proceso de configuración de los partidos Liberal y Conservador, desde mediados del siglo pasado, en torno de los cuales se formaron las frágiles ideas de Estado y de Nación, como formas de representación de una sociedad profundamente fragmentada y desarticulada.

El bipartidismo adelantó con relativo éxito las funciones de integración y articulación social y política, otorgó el sentimiento de pertenencia a una comunidad y a una idea de Nación, entretejió complejos lazos de sociabilidad, relegando al Estado a una función de apoyo en la ejecución y refrendación de su proyecto de dominación. La subordinación del Estado llegó al punto de que los partidos políticos no requirieran del desarrollo de formas organizativas propias, pues contaban con el usufructo de la organización estatal. A ello se refiere F. Leal: « al constituir el bipartidismo la forma casi única de organización y representación políticas de la sociedad colombiana en formación, la materialización de su aparato organizativo la proporcionaban en forma permanente las instituciones del Estado, ya que los partidos prácticamente monopolizaron, como mediadores necesarios, el control de tales instituciones... Todo fenómeno que sufriera la mediación de los partidos aseguraba de hecho su legitimación política».

De esta forma se entró en un claro proceso de privatización del poder, arrastrando consigo una identificación entre Estado, partidos y élites dominantes. Marx decía que la burocracia hace de los asuntos públicos su negocio privado. En Colombia, esto es extensivo a los partidos políticos y a las élites económicas que han colocado al Estado al servicio de sus intereses privados. Esto se expresa en dos fenómenos importantes para la comprensión de la compleja tensión resultante de una modernización a medias y de una caricatura de modernidad, que actualmente se ha extremado en la sociedad colombiana: la privatización del Estado y la relativa autonomía de lo económico con relación a lo político.

La privatización del Estado

El sistema político bipartidista ha monopolizado las instituciones estatales mediante su manejo burocrático y económico con el fin de garantizar y reproducir su dominación. Es un proceso de privatización del Estado que pone al descubierto la prevalencia de los intereses particulares y privados de las élites dominantes sobre el interés público de las instituciones y del quehacer estatal. Tilman Evers, considera que la privatización del Estado es una característica prácticamente generalizada en los países de la periferia del capital. El uso que le da al término lo restringe al ámbito de los intereses económicos puesto que con él designa el apoyo estatal a los fines económicos de grupos reducidos, llegando hasta la instrumentalización del Estado para intereses particulares. El sentido que aquí se le otorga a la privatización del Estado, le confiere especificidad al caso colombiano, pues compromete no sólo los fines económicos sino también políticos. Por otra parte, no se alude a una instrumentalización del Estado, pues el problema no se reduce al ejercicio instrumental del poder por parte de las personas ubicadas en posiciones estratégicas. En el caso colombiano, no se trata de una «infiltración en el Estado», sino de la misma formación del Estado que estuvo y está mediada por la dominación impuesta por las dos subculturas políticas, lo que ha impedido la configuración de un Estado moderno, e incluso una modernización del Estado que permita una mayor eficiencia y eficacia de la gestión estatal.

En opinión de G. O'Donnell un Estado moderno debe ser en lo fundamental productor de consenso. Para ello debe aparecer como el representante de los intereses sociales lo cual se puede lograr, en su opinión, a través de tres mediaciones entre el Estado y la sociedad civil: i) La Nación, que permite la constitución de una red de lazos de solidaridad que se superponen a los antagonismos de la sociedad civil y que además le otorga a una colectividad un reconocimiento que se diferencia del de otras naciones; ii) La Ciudadanía, como categoría que otorga igualdad a los individuos respecto del Estado; y iii) El Pueblo o Lo Popular, que supone un conjunto de peticiones básicas de justicia que forman la base de las obligaciones del Estado respecto a los sectores más desfavorecidos.

En la medida en que el Estado logre ser productor de consenso en torno de las mediaciones señaladas, coadyuvará a la formación de un sistema de organización sociopolítica integrador de los diversos sectores sociales, mediante la constitución de los individuos en actores sociales y políticos.

En Colombia, por las razones señaladas anteriormente, las nociones de Nación, Ciudadanía y Pueblo, tienen un carácter inacabado y fragmentado, carentes por consiguiente de un sentido integrador. El Estado no ha logrado entonces ser productor de consenso al estar atrapado por un modelo liberal de desarrollo y por un régimen político elitista. Dicho en los términos de Pècaut, «el Estado nunca se ha emancipado lo suficiente de las redes de poder de la sociedad civil como para promover la afirmación nacional». El poder se ha aglutinado en las élites de los partidos tradicionales y en los gremios económicos, con lo cual la ciudadanía se restringe a una práctica de refrendación electoral y el pueblo sale de su anonimato únicamente para esos fines.

Los valores antimodernos del sistema político colombiano se sintetizan en el carácter premoderno del Estado. Un Estado carente de autonomía, de liderazgo, no secular ni pluralista, está imposibilitado para generar consenso, y por tanto, prevalece la coerción como medio de garantizar el orden que dice representar.

La privatización del Estado ha tenido en el clientelismo, como característica central del sistema político colombiano, el mejor mecanismo para su configuración y reproducción. La satisfacción de las demandas políticas está mediada por los barones electorales; las prioridades de inversión y la asignación de recursos públicos pasan por una compleja negociación entre los intereses privados de las élites políticas y económicas, con particular fuerza cuando se trata de las asignaciones regionales que dependen del pulso entre los jefes políticos respaldados por su caudal electoral. De igual forma, la actividad legislativa del Congreso está atada a concesiones y favoritismos que como corporación disfrutaban y la composición de la rama judicial y el desempeño de cargos públicos obedecen a una cuidadosa distribución burocrática entre las dos colectividades, liberal y conservadora.

Esta no diferenciación entre el Estado y los partidos políticos, ha impedido también el ejercicio de las funciones de control y de fiscalización sobre el quehacer estatal, tan necesarias para la transparencia y legitimidad del mismo. De ahí que, en Colombia, cada vez se asocie más el ejercicio de la política con el clientelismo, la corrupción y su usufructo privado.

Por lo anterior se comprende el carácter meramente formal de la democracia colombiana. Se trata de un sistema aparentemente democrático en el que el pueblo participa formalmente de las elecciones, sin lograr siquiera en este ejercicio una transparencia y una igualdad de oportunidades para elegir y ser elegido. En la elemental práctica del ejercicio electoral hay factores que vulneran y atentan contra el derecho de representación y contra la elección libre de los mismos. ¿Qué decir entonces de las enormes restricciones a la participación en las decisiones que conciernen a la sociedad civil y que coartan el ejercicio de las libertades ciudadanas? Sin duda, estas restricciones están en la base del creciente sentimiento de ilegitimidad que experimentan amplios sectores de la sociedad civil con relación a la organización política y estatal, lo que acrecienta su divorcio y la falta de compromiso y credibilidad entre unos y otros.

La relativa autonomía de lo económico con relación a lo político

En el proceso de privatización del Estado las élites económicas han contribuido enormemente, al lado de las élites políticas. Seguidoras entusiastas de la modernización económica han hecho de la «libre empresa» un principio invocado como fundamento de la democracia, cuando en realidad se trata de una práctica para hacer prevalecer sus intereses por encima de cualquier consideración de orden político o social.

Las élites económicas organizadas en gremios, se han constituido como verdaderos suprapoderes que no requieren de la intermediación de los partidos políticos para hacer valer sus intereses ante el Estado. Incluso han invadido algunos

espacios estatales, ejerciendo funciones de control y regulación que serían propias del Estado. Dos ejemplos son ilustrativos al respecto:

i) Su reiterada oposición a una legislación laboral que regule los conflictos obreiro-patronales, e incluso que otorgue derechos que garanticen la reproducción de la fuerza de trabajo, con lo cual se reservan para sí la normativización y la gestión de las relaciones laborales.

ii) El manejo privado de fondos estatales, como es el caso de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que dada la importancia de este producto en la vida económica y sociopolítica del país, no se puede subestimar.

De esta forma los gremios han logrado que lo económico goce de una relativa autonomía con relación a lo político, al liberarse del juego interpartidista, y más exactamente del sectarismo que por tanto tiempo estuvo en la base de la diferenciación entre liberales y conservadores.

Las repetidas crisis políticas que han sacudido al país, no han sido obstáculo para que las élites económicas prosigan su marcha hacia la modernización económica. Los límites a ésta derivan principalmente de factores de orden estructural que se han mantenido por su restringido proyecto, tales como el tamaño del mercado, el carácter oligopólico de la industria, el retraso de la modernización agropecuaria, la limitación de divisas, etc. Por supuesto, el sistema político es el que ha salvaguardado el orden que les ha permitido su lugar de privilegio.

Esta situación es la que explica en buena parte, que la dinámica económica se haya escindido con relativo éxito de la dinámica política, fenómeno que sorprende a muchos analistas. Mientras el país está sumido en una profunda crisis sociopolítica, como fue el período de La Violencia de mediados de siglo y el actual, la actividad económica no se ve afectada en forma considerable. Por el contrario, al calor del desorden la violencia le aporta su ingrediente al negocio. Ello expresa la relativa autonomía de lo económico sobre lo político, lo cual está asociado al tipo de intervención del Estado, y a que el sistema bipartidista se encuentra subsumido en una estrategia de poder sin proponer un orden mínimamente diferente al vigente, lo que demandaría cambios en la organización económica. Los proyectos económicos han carecido de sello político partidista.

La obtención inmediata de lucro unifica a los sectores dominantes sin siquiera mediar un debate político sobre los medios más idóneos para lograrlos, en una perspectiva de mediano y largo plazo. Al vaivén de la coyuntura económica, marcada con fuerza por el comportamiento externo, se vuelven con igual facilidad librecambistas o proteccionistas. De esta forma, la política económica, siempre con un carácter indicativo y no imperativo, carece de toda autonomía y de un propósito de largo plazo al estar subordinada a sus intereses inmediatos.

Otro punto de encuentro fundamental entre las élites económicas y políticas y que explica en gran medida la relativa estabilidad que hasta un pasado reciente tuvo su régimen de dominación, se encuentra en su carácter conservadurista. La modernidad no ha sido un imperativo para ellas. Para las élites económicas el orden tradicional, que ha pretendido conservar el sistema político, resulta un contexto muy adecuado para que los costos sociales de la modernización económica sean asumidos con resignación por quienes los padecen, o acallados mediante la intolerancia política, la no

admisión del pluralismo y la represión a las distintas formas de protesta social. Por consiguiente, los conflictos derivados del proceso de modernización económica se encuentran desprovistos de canales de expresión y de confrontación política admitida.

Tampoco son desestimables las relaciones de corte tradicional que aún perviven en el mundo de los negocios. En los grupos económicos se advierte un «comportamiento aristocrático» frente a los negocios, al decir de S. Kalmanovitz: usufructúan su relación directa con las ramas del poder público, en particular con el ejecutivo, gozan de privilegios de inmunidad frente a la ley y los acompaña «una mentalidad de que las ganancias se apropian como simple derivación de un viejo poder familiar. Presentan una clara incapacidad para enfrentar pérdidas y reveses y expresan pánico frente al cambio».

No obstante lo anterior, el carácter marcadamente liberal que ha acompañado a la modernización económica en Colombia, no debe interpretarse como una expresión de fortaleza y solidez de las élites dominantes, para imponer sus derroteros y hacer del Estado un mero instrumento a su servicio.

El proceso hay que examinarlo como un continuo juego de fuerzas y tensiones sociales y políticas en el que intervienen por supuesto los sectores subordinados. Su precaria organización social y política, su escasa identidad y autonomía para configurarse como proyecto alternativo, el dogmatismo y el sectarismo en que se han visto atrapados muchos intentos de oposición o de organización meramente gremial, son factores relevantes en la explicación del camino seguido por las élites dominantes, que lo han visto facilitado por la poca presión para hacer imperativas las transformaciones estructurales, que hubiesen propiciado un proceso de modernización más amplio e integrador y de democracia menos restringida.

Con lo anterior no se desconoce la lucha tremendamente desigual entre las partes y el abuso de la coerción por parte del establecimiento. Pero en lo que se quiere insistir es en que de esta correlación de fuerzas depende en buena medida el tipo de intervención estatal, que ha sido fundamental en el carácter excluyente de la modernización económica y en la contención de la modernidad.

Este es pues el marco general que nos permite adentrarnos en el examen de la sociedad colombiana, insistiendo siempre en las tensiones sociales y políticas que muchas veces quedan ocultas por el proceso de modernización económica, con el aval del modernismo que como apología ha acompañado dicho proceso.